



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

L-125752-1

“Acuña, Marisa Andrea c/  
Sociedad Española de  
Socorros Mutuos de  
Tres Arroyos y Otra s/  
Daños y Perjuicios”  
L.125.752

Suprema Corte de Justicia:

I.- En el marco de la acción por daños y perjuicios incoada por la señora Marisa Andrea Acuña contra los demandados Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos y La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., con motivo del accidente *in itinere* que denuncia padecido a fs. 7/8 vta., ulteriormente ampliado por presentación electrónica de fecha 19 de junio de 2019, el Tribunal de Trabajo N° 3 del Departamento Judicial de Tres Arroyos, declaró la inconstitucionalidad del art. 1° de la ley provincial 14.997 a través de la cual la provincia de Buenos Aires adhirió al régimen instaurado por la Ley nacional 27.348, y por vía de consecuencia, determinó la inaplicabilidad al caso del Título I de aquella norma nacional, ratificando su competencia para entender en los presentes actuados de conformidad con lo previsto por los arts. 1 y 2 inc. "a" de la Ley 11.653 (v. fs. 132/145 vta.).

Luego de repasar cómo fue la secuencia de la promulgación de las leyes nacional 27.348 y provincial de adhesión 14.997 a los fines de analizar su aplicación temporal en el ámbito provincial, ponderando que más allá de la fecha del presunto accidente de trabajo que dijo padecer el accionante, la demanda promovida se había presentado en la Receptoría General de Expedientes local con fecha 18 de febrero de 2019, atendiendo a la naturaleza adjetiva de las disposiciones del Título I de la ley 27.348, estimó que dicha normativa, desde que comenzara a regir la ley provincial de adhesión, resultaba de inmediata aplicación a las causas pendientes, entre las que señaló se encontraba el supuesto juzgado en la especie. Se adentró así en el estudio de la constitucionalidad de la ley provincial 14.997 de manera oficiosa, con apoyo en doctrina de la CSJN que citó (causa "Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A.", sent. del 14-IX-2004). En pos de justificar aún más el temperamento adoptado, citó igualmente doctrina legal de V.E. cuyos precedentes también individualizó (causa L. 66.191,

"Castellani", sent. del 27-II-2002 y voto de la Dra. Kogan en causa L.91.062, "Fernández", sent. del 10-III-2011).

En ese análisis memoró que según el art. 1° de la ley 27.348 el tránsito por ante las comisiones médicas jurisdiccionales constituye un recaudo de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, así como que la invitación formulada en el art. 4° del mismo cuerpo normativo para su adhesión por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, importa la delegación expresa a la jurisdicción federal de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 a 3 de dicha ley y en el apartado 1 del artículo 46 de la ley 24.557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación por parte de los estados adherentes de la normativa local que resulte necesaria.

Continuó el examen con el estudio de la ley provincial de adhesión (Ley 14.997), más precisamente con el de la fundamentación plasmada por el legislador local en el mensaje de elevación del proyecto que terminara convirtiéndose en ley, cuyos argumentos fue rebatiendo uno a uno, para concluir que la misma era sólo aparente dado que -según su apreciación- desinterpreta los alcances de las objeciones constitucionales declaradas por la CSJN *in re* "Castillo", erigiéndose en un mero arbitrio con apoyo en conclusiones dogmáticas, violatorio de la razonabilidad republicana que demandan los actos de gobierno, en clara transgresión a las mandas contenidas en los arts. 1 y 28 de la Constitución Nacional y 1, 15, 39 aps. 1 y 3 y 57 de la Carta local.

En un segundo orden de consideraciones, juzgó que dicha normativa resultaba violatoria de las autonomías provinciales y del sistema federal de gobierno, en tanto según el texto expreso de la ley 27.348 la mentada adhesión al régimen de la norma nacional implica la delegación a favor de la jurisdicción federal de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las pautas trazadas en el Título I de aquella, así como la adaptación de la normativa local a esos fines, lo que representa una "delegación" en favor de la administración nacional de competencias que les son inherentes a las provincias, en clara transgresión al art. 121 de la Constitución nacional.

Recordó el magistrado ponente -Dr. Taraborelli- que ello debía ser interpretado a tenor de lo normado por el artículo 5 de la Constitución Nacional, según el cual las provincias



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

L-125752-1

han de dictarse una constitución que respete el sistema representativo republicano, asegurándose -entre otros- la administración de justicia como una de las funciones esenciales que hacen a su existencia como entes autónomos, debiendo garantizarles el Gobierno Federal el goce y ejercicio de sus instituciones. Y en ese sentido, memoró que el afianzamiento de la justicia anunciado en el preámbulo de la Carta local halló expresa recepción en el art. 15 en cuanto asegura la tutela judicial continua y efectiva con un acceso irrestricto a la justicia, en tanto que en el art. 39, ap. 1º, se determinó además la obligación de establecer tribunales especializados para solucionar los conflictos de trabajo, con expresa referencia al principio de progresividad.

Concluyó así que la cesión de competencias implícita en la adhesión dispuesta con el dictado de la ley 14.997 importa restringir el conocimiento de los órganos jurisdiccionales competentes, en contraposición con el deber de afianzar la justicia anteriormente aludido, desde que el eventual conocimiento judicial de esta clase de controversias se ve limitado al de una vía apelatoria, vedándose con ello la tutela judicial efectiva y su acceso irrestricto.

Agregó que dicha situación es la que se daría en este caso con la intervención del Tribunal decisor, en tanto se impone la participación -recurso mediante- de los tribunales del trabajo correspondientes a la jurisdicción del domicilio de la comisión médica que intervino, en lugar de la del tribunal correspondiente a la localidad en la que sucedieron los hechos -con las dificultades que ello representa, en función de la distancia-, con afectación a la garantía establecida por el art. 39, aps. 1º y 3º de la Carta local, así como a la de igualdad determinada por el art. 11 de dicho cuerpo supralegal.

Refirió además que la adhesión aludida resultaba violatoria del ejercicio indelegable del poder de policía en materia laboral determinado por el art. 39 inc. 1º de la Constitución provincial, así como de los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones, indemnidad y progresividad afianzados en el inc. 3º de dicha norma, pues agregó que el estado provincial no podría cumplir aquellos mandatos constitucionales al delegar en la jurisdicción administrativa nacional las competencias necesarias para ello.

Profundizando el análisis y reparando en la cláusula constitucional local contenida en el art 45, formuló algunas consideraciones en torno de la autonomía provincial que, como presupuesto del sistema federal de gobierno al que adscribe la Constitución Nacional, se pone de manifiesto en la posibilidad que cada una de ellas tiene para dictarse su propia constitución (arts. 5 C.N.) y darse sus instituciones locales, de manera que una delegación de atribuciones como las descriptas resulta a su juicio repugnante a la aludida manda constitucional, así como a las demás garantías mencionadas de la Carta Magna nacional y de la Constitución provincial, con cita de los arts. 1, 5, 14 bis, 28, 31, 75 inc. 12, 121 y 122 CN y 1, 5, 11, 15, 27, 36, 39 aps.1 y 3, 45 y 47 C.P.

A lo señalado añadió que si bien a través de la ley provincial 14.997 la Provincia había adherido al régimen de la ley nacional 27.348, ello importaba asimismo la asunción de adecuar la normativa local que resultara necesaria, en referencia al art. 2 ap. "a" de la ley 11.653 que resulta la norma habilitante para que los Tribunales del Trabajo provinciales intervengan en los reclamos por accidentes y enfermedades profesionales, sin que la ley 14.997 exprese nada al respecto, manteniéndose además la vigencia de lo normado por el art. 26 ap. 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia. Agregó a su análisis que la reforma introducida con la sanción de la ley 15.057, a través de lo dispuesto por el art. 2 inc. "j" no modificaba su conclusión pues la misma no se encontraba vigente al momento de interposición de la demanda, siendo además que la disposición del art. 103 de la misma controvertía la manda contenida en el art. 78 de la Constitución nacional, en tanto se había omitido un acto esencial en la formación de las leyes como lo es su promulgación, debiendo estarse entonces a cuanto a su vigencia, a lo dispuesto por el art. 104 que lo postergara para el primer día hábil de febrero de 2020.

En ese orden de ideas, ponderando que la declaración de inconstitucionalidad de una norma resulta la *última ratio* del ordenamiento jurídico, juzgó además innecesario expedirse acerca de la planteada inconstitucionalidad de la Ley 27.348, sin perjuicio de la inaplicabilidad en la especie de su Título I, como consecuencia derivada de la invalidez supralegal propiciada con respecto al art. 1° de la ley local de adhesión, así como con relación a los reproches de igual carácter vertidos con relación a los arts. 21, 22 y 46 de la



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

L-125752-1

Ley 24.557.

II.- Contra dicho modo de resolver se alzó la aseguradora demandada -por apoderado- únicamente a través del recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido mediante presentación electrónica de fecha 28 de febrero de 2020, cuya copia en formato PDF se anexa como archivo adjunto al sistema SIMP Procedimientos de esta Procuración General.

Habiéndose concedido el remedio procesal en la instancia ordinaria a fs. 147 y vta., V.E. dispuso conferir vista del mismo a través de oficio electrónico de fecha 3 de septiembre del año en curso, circunstancia que motiva mi intervención en autos a tenor de lo dispuesto en el art. 302 del Código Procesal Civil y Comercial.

III.- En respaldo de su impugnación extraordinaria de inconstitucionalidad, el recurrente, en primer lugar, desarrolla una alegación en torno a la inexistencia en el caso de los recaudos que ese Címero tribunal provincial ha establecido para la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Sostiene que ha mediado en la especie una declaración de inconstitucionalidad en abstracto.

Luego de formular una síntesis de los antecedentes del caso, señala que el tribunal ha declarado la inconstitucionalidad de la ley de adhesión 14.997 por reputarla contraria a ciertas garantías consagradas por la Carta local, en referencia al acceso a la justicia.

Sostiene que la adhesión dispuesta por la provincia de Buenos Aires a través de la Ley 14.997 imponía la aplicación inmediata del régimen instaurado por la Ley nacional 27.348, cuyo procedimiento describe alabando sus bondades, y añade además que para resolver en el sentido indicado el tribunal no ha tenido en consideración la reforma introducida por la normativa nacional con relación al art. 46 de la Ley 24.557, al haber eliminado la federalización establecida primigeniamente, y determinado la intervención de la justicia ordinaria, una vez agotada la instancia ante las comisiones médicas jurisdiccionales. Señala que con esta modificación ha quedado salvado el principal escollo que se erigía como fundamento de las declaraciones de inconstitucionalidad del sistema, pues -según sostiene- no hay ya delegación por las provincias de facultades jurisdiccionales propias, dado que el juzgamiento final de la cuestión queda en cabeza de los órganos competentes por razón de la materia del

Poder Judicial local. Afirma que con ello se han superado los reproches constitucionales señalados por la CSJN *in re* "Castillo", al igual que los determinados por ese cimero tribunal provincial *in re* "Quiroga", en oportunidad de declarar la inconstitucionalidad del art. 46 de la L.R.T, y como consecuencia de ello, la de los arts. 8, 21 y 22 del mismo cuerpo normativo.

Agrega que tampoco se afectan las garantías contenidas en los arts. 15 y 39 de la Carta local pues la tutela continua y efectiva así como el acceso irrestricto a la justicia en ellos determinados no se ven transgredidos por la creación de una instancia administrativa previa como la instaurada por la ley 27.348, que permite a los trabajadores acordar su reclamo en un lapso razonable y, en caso de disentir con lo determinado por la comisión o de agotarse el plazo previsto, acudir a la vía judicial revisora por ante los órganos jurisdiccionales de la especialidad.

Recuerda asimismo lo resuelto por la CSJN en el precedente "Ángel Estrada" en punto a la validez de las funciones jurisdiccionales ejercidas por órganos administrativos en la medida que se encuentre debidamente garantizada la ulterior revisión judicial en forma amplia y suficiente, tal como -sostiene- sucede en la especie a través de lo normado por el art. 2° de la Ley 27.348, revisión cuyo trámite, además, -dejando a salvo la cuestión del plazo para la interposición del recurso- ha de regirse conforme las pautas procesales de la ley de procedimiento laboral provincial 11.653.

Abunda acerca de las bondades del sistema instaurado por la ley nacional cuya inaplicabilidad al caso fuera decidida por el tribunal actuante, formulando consideraciones relativas a las mejoras que las sucesivas modificaciones legislativas fueron introduciendo al régimen de las comisiones médicas como instancia prejudicial administrativa previa y obligatoria, de consuno con las distintas objeciones constitucionales formuladas tanto a nivel local como nacional, con cita y transcripción parcial de precedentes que han avalado al ejercicio de funciones jurisdiccionales por entes administrativos (CSJN, *in re* "Fernández Arias c/ Poggio", sent. del 20-IV-2008; entre otras).

Finalmente, en defensa de la constitucionalidad de la ley de adhesión provincial desarrolla un *racconto* de antecedentes de V.E. que habían avalado en tiempos pretéritos regímenes tales como el establecido por el Decreto 1005 del año 1949, en cuanto preveía



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

L-125752-1

trámites administrativos de similar tenor al determinado por la ley 27.348, en los que la autoridad de aplicación -al menos en algunos períodos que refiere (en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a partir de la sanción del Decreto PEN 1111/1973 hasta el dictado de la ley 10.149/1983, por la que fuera restablecida la Subsecretaría de Trabajo provincial)- había estado en cabeza del Ministerio de Trabajo nacional, actuando como instancia administrativa previa a la judicial no sólo en la Capital Federal, sino también en los territorios provinciales.

En mérito a las alegaciones formuladas estima que la adhesión provincial al régimen nacional mediante la sanción de la Ley 14.997 está lejos de avasallar los principios sentados por el art. 5 de la Constitución nacional y concordantes de la provincial, así como de infringir las facultades reservadas de las provincias. Contrariamente sostiene que en ejercicio legítimo de la autonomía que a aquellas les compete (arts. 121 y 122 CN) es que la provincia de Buenos Aires ha efectuado la mentada adhesión.

Por último, agrega que se ha soslayado la consideración y aplicación de la Ley provincial 15.057 de reforma al procedimiento laboral provincial, en lo que -según su apreciación- constituye una virtual modificación de la ley de adhesión cuya inconstitucionalidad fuera decretada, pues refiere que con dicha sanción han perdido virtualidad la mayoría de los argumentos enarbolados para decretar la invalidez supralegal del sistema, en la medida que la nueva normativa determina en su art. 2 inc. "j" que la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales a cargo de los Juzgados del Trabajo, procederá a través de una acción laboral ordinaria, lo que supone una reclamación plenaria y amplia, con posibilidades de debate y prueba inexistentes en el régimen anterior, en el que los trabajadores disconformes sólo contaban con una apelación en relación.

Deja planteada la cuestión constitucional manteniendo y formulando reserva del caso federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

IV.- Impuesto en los términos aludidos del contenido de la queja ensayada, estoy en condiciones de adelantar que más allá de la prédica recursiva desarrollada por el impugnante, razones de diversa índole conducen a expedirme en sentido favorable a la revocación del decisorio impugnado.

De modo liminar resulta menester aclarar -tal como ya fuera señalado en otras oportunidades de similar tenor a la que aquí se conjuga- que en virtud de lo previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la vía intentada se abre ante el exclusivo supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la constitución local (conf. S.C.B.A., causas L. 93.212, sent. del 11-IV-2012; L. 116.822, sent. del 6-V-2015; C. 108.529, sent. del 29-VII-2017, entre otras).

Ahora bien, sentado lo anteriormente expuesto, no escapa al análisis que cabe aquí formular que en el decisorio impugnado las cláusulas constitucionales sobre las que el sentenciante de grado acuñó el razonamiento cuya conclusión motivara el alzamiento en estudio, se entroncan tanto en la Constitución nacional como en la provincial. Ello así, en tanto resolvió de oficio el caso constitucional señalando que la ley provincial 14.997, en cuanto adhiere expresamente al régimen legal instituido por el Título 1 de la ley 27.348, delegando en el poder administrador nacional su facultad jurisdiccional y la competencia que detenta en orden al dictado de la normativa procedimental aplicable, vulnera las imposiciones del preámbulo y los arts. 1, 5, 14 bis, 28, 31, 75 inc. 12, 121 y 122 de la Constitución Nacional, como asimismo, el preámbulo y los arts. 1, 5, 11, 15, 27, 36, 39 ap. 1º y 3º, 45 y 47 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y los arts. 1, 24, 25, 28, 29 y 30 del Pacto de San José de Costa Rica (v. fs. 144 vta./145).

Y si bien dicha circunstancia fue la que motivó la adopción del criterio esbozado en ocasión de expedirme en la causa L. 121.915, "Medina", cuyo dictamen suscribiera con fecha 26-IX-2018, y luego reiterara al emitir opinión en las causas L. 123.465 (dict. del 29-VII-2019), L. 123.198 (dict. del 7-X-2019), L. 123.465 (dict. del 29-VIII-2019), L. 123.717 (dict. del 21-X-2019); L. 123.758 (dict. del 27-XII-2019), L. 124.006 (dict. del 9-III-2020), L. 124.301 (dict. del 10-III-2020), L. 124.597 (dict. del 12-III-2020) -entre varias más-, propiciando la desestimación de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad deducidos en tales oportunidades como únicas vías de impugnación



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

L-125752-1

extraordinaria articuladas por aplicación de la doctrina legal sentada por V.E. según la cual *“La vía revisora establecida en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia se abre en el único caso en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y se haya decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local y no cuando los fundamentos de la sentencia impugnada, se sustentan además en tales preceptos de la carta provincial (art. 36 inc. 7; 103 inc. 13), con normas de la Constitución nacional (arts. 14, 17, 18, 29, 121, 122) materias éstas ajenas al contenido del remedio intentado y propio en su caso del de inaplicabilidad de ley”* (conf. S.C.B.A., causas C. 98.720, resol. del 21 -IV-2010; C. 103.326, resol. del 8-II-2012 y C. 116.585, resol. del 11-IV-2012; entre otras), el temperamento recientemente adoptado por ese cívico tribunal al fallar -entre otras- en las causas L.124.558, L. 124.006, L.124.301, L.122.239, L.123.465, L.124.513. L.124.507, L.125.363 y L.123.399 -todas del 16 de septiembre del año en curso-, al amparo de lo normado por el art. 31 bis, tercer párrafo, de la Ley 5827, conducen a modificar el criterio expuesto sobre la base de aquella doctrina, soslayando los déficit técnico-recursivos apuntados, en orden a resultar el único carril de impugnación extraordinaria deducido por la parte agraviada.

En efecto, en las causas citadas -entre varias más-, frente a similares circunstancias a las cotejadas en la especie, ese Excmo. Tribunal dispuso acoger la procedencia de los recursos extraordinarios inconstitucionalidad interpuestos con fundamento en que los planteos introducidos en dichas piezas recursivas encontraban adecuada respuesta en lo expresado al decidir, por vía del remedio de inaplicabilidad de ley, los precedentes individualizados como L. 121.939, "Marchetti" (sentencia de fecha 13-V-2020), L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (ambas sentencias de fecha 28-V-2020), en lo vinculado a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4), a cuyas conclusiones y fundamentos remitió con apoyo en el art. 31 bis, tercer párrafo, de la ley 5827, sin otro desarrollo argumental mas que la aludida remisión.

Siendo ello así y dejando a salvo mi opinión personal en aras de priorizar los motivos de economía y celeridad procesal invocados para resolver en el sentido indicado, al

amparo de la cláusula legal mencionada, solo me resta memorar que en los precedentes invocados -causas L.121.939,"Marchetti", L.123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo"- esa Suprema Corte, por mayoría de opiniones y fundamentos, se expidió en favor de la constitucionalidad del mecanismo por el cual la Provincia adhirió a la ley 27.348, como así también, acerca de la validez del régimen de la instancia previa, obligatoria y excluyente ante los organismos de la administración nacional determinado por la ley 27.348, en su cotejo con ambas constituciones -la federal y la local-, criterio que por las particulares razones apuntadas párrafos arriba habré de propiciar como de aplicación en la especie.

V.- Consecuentemente, en orden a las consideraciones formuladas y ponderando que en autos se reiteran las circunstancias planteadas en los precedentes recientemente resueltos y antes aludidos (causas L.124.558; L. 124.006; L.124.301; L.122.239; L.123.465; L.124.513; L.124.507; L.125.363; y L.123.399 -entre otras-, ya citadas), estimo que deberá V.E. hacer aplicación del temperamento reseñado, decretando la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente) en orden a los fundamentos desarrollados en los precedentes L.121.939,"Marchetti", L.123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo", a cuyos términos me remito, en honor a la brevedad (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5827 y modif.), determinando en este estado la incompetencia del tribunal de grado para entender en los presentes obrados.

La Plata, 1 de octubre de 2020.

Digitally signed by  
Dr. CONTE GRAND,JULIO  
MARCELO  
Procurador General de la  
Suprema Corte de Justicia  
PROCURACION GENERAL -  
PROCURACION GENERAL  
Procuracion General

01/10/2020 12:41:14